

BRIDGES NETWORK

PUENTES

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible

VOLUMEN 17, NÚMERO 8, NOVIEMBRE 2016



Normas puntuales para el comercio internacional

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

Disciplinas sobre medidas no arancelarias: un nuevo modelo

OPCIONES DE POLÍTICAS INICIATIVA E15

Lecciones sobre cooperación regulatoria

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

Normas laborales: una perspectiva desde Chile



International Centre for Trade
and Sustainable Development

PUENTES

VOLUMEN 17, NÚMERO 8, NOVIEMBRE 2016

PUENTES

Plataforma global para el intercambio de información sobre comercio y desarrollo sostenible en América Latina.

PUBLICADO POR:

ICTSD

Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible
Ginebra, Suiza

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL
Ricardo Meléndez-Ortiz

EDITOR EN JEFE
Andrew Crosby

DIRECTORA EDITORIAL
Perla Buenrostro Rodríguez (ICTSD)

EDITOR
Patricio Rosas Opazo

ASISTENTE EDITORIAL
Eugenio Villegas

CONSEJO EDITORIAL
Carlos Murillo (CINPE)
Pedro Roffe (ICTSD)
Miguel Rodríguez (ICTSD)

DISEÑO GRÁFICO
Flarvet

LAYOUT
Oleg Smerdov

PUENTES agradece sus comentarios y sugerencias en puentes@ictsd.ch

Para eventuales contribuciones consulte nuestra página web
<http://ictsd.org/news/puentes/>

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

4 Disciplinas sobre medidas no arancelarias en el TPP: un nuevo modelo

Juan Antonio Dorantes

OPCIONES DE POLÍTICAS INICIATIVA E15

9 Cooperación regulatoria: lecciones de la OMC y del régimen de comercio mundial

Petros C. Mavroidis

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

14 La regulación chilena sobre etiquetado y publicidad de alimentos como instrumento contra la obesidad

Sofía Boza y Macarena Espinoza

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

18 Normas laborales en el Acuerdo de Asociación Transpacífico: una perspectiva desde Chile

Pablo Lazo-Grandi

OPCIONES DE POLÍTICAS INICIATIVA E15

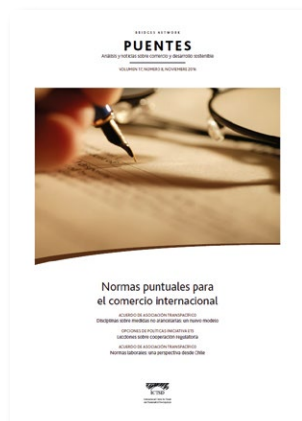
22 Repensando a futuro las disciplinas para las subvenciones

Gary Horlick y Peggy A. Clarke

27 Sala de prensa

28 Publicaciones sugeridas

Normas puntuales para el comercio internacional



El reciente triunfo de Donald Trump en la elección presidencial del país más poderoso del mundo pone en vilo el modelo de integración internacional, la globalización y, por supuesto, el libre comercio, al menos tal y como los conocemos.

¿Sistema fallido para algunos, obtuso, carente? Sin duda, son muchos los retos que enfrenta, particularmente en un contexto de gran y creciente desigualdad en diversos países alrededor del mundo. A esto se suma el desgaste del modelo neoliberal y su escasa conexión con una parte importante de la población.

El ahora presidente electo tomará el próximo 20 de enero el liderazgo de Estados Unidos, aunque las elecciones y, particularmente, las declaraciones de Trump han dejado una amplia brecha en la sociedad. El bosquejo de su política comercial plantea muchos desafíos y gran incertidumbre.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su potencial renegociación o denuncia por parte de Estados Unidos es el primero en esa agenda comercial en riesgo. Luego le sigue el Acuerdo de Asociación Transpacífico. La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, por su parte, también podría languidecer en las prioridades de la nueva administración.

China, a su vez, tendrá que encontrar un lugar de previsibilidad en sus relaciones económicas y de toda índole con Estados Unidos. Lo mismo sucede con América Latina y prácticamente con todo el planeta. Ante este panorama cambiante, enfoques creativos, proactivos y hasta defensivos están emergiendo.

Uno de los llamados más importantes en este momento se centra en el Estado de Derecho y las normas puntuales para el comercio, la inversión y las relaciones económicas internacionales. Un cuerpo robusto, aunque ciertamente perfectible, existe y se ha desarrollado en instancias multilaterales, plurilaterales y bilaterales para tales propósitos.

Trump ha sentenciado que revertirá décadas de política comercial conciliatoria. Estemos de acuerdo o no, en estos tiempos de crisis e inminente reforma, deben privilegiarse los enfoques constructivos, abiertos y progresistas. Es a través de normas, negociación, diálogo y cumplimiento con el derecho internacional que debe combatirse la incertidumbre y construirse una nueva realidad y orden económico donde todos participemos y nos beneficiemos.

El equipo de Puentes.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

Disciplinas sobre medidas no arancelarias en el TPP: un nuevo modelo

Juan Antonio Dorantes

Ante la eliminación de los aranceles, las medidas relacionadas con el cumplimiento de reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de conformidad y normas sanitarias y fitosanitarias pueden restringir significativamente el intercambio comercial. Es por ello que los tratados comerciales bilaterales o regionales incluyen cada vez más disciplinas tendientes a eliminar o reducir el impacto de dichas medidas. El TPP no es la excepción y constituirá un modelo para futuras negociaciones en la materia.

En el Informe sobre el Comercio Mundial 2012, la Organización Mundial del Comercio (OMC) destaca que "la contribución de las medidas no arancelarias a la restricción global del comercio es significativa y... causan mucha más restricción del comercio que los aranceles. Las medidas OTC/MSF tienen efectos positivos en el comercio en los sectores más avanzados tecnológicamente, pero efectos negativos en los sectores agrícolas [y] ...tienen un efecto negativo en la diversificación del mercado de las exportaciones. La armonización y el reconocimiento mutuo de esas medidas atenúan los efectos negativos en el comercio de la diversidad de medidas OTC/MSF y de reglamentaciones nacionales en la esfera de los servicios".

Aun con estos sólidos argumentos para ejercer mesura en la adopción de nuevas medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y obstáculos técnicos al comercio (OTC), y aun cuando los Acuerdos sobre MSF y OTC buscan eliminar las barreras innecesarias al comercio internacional, ello no ha impedido que anualmente el número de medidas notificadas por los miembros, así como las preocupaciones comerciales¹ relacionadas con las mismas, se hayan incrementado de manera progresiva.²

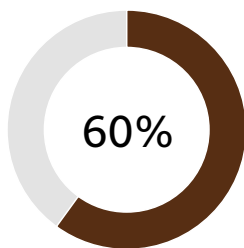
Conforme al Informe Anual de la OMC 2016, en 2015 se recibió la cifra récord de 1681 notificaciones de MSF, contra 1410 en 2010, 855 en 2005 y 468 en el año 2000. Por su parte, en 2015 se recibieron 1989 notificaciones de OTC, cifra que si bien fue menor a los tres años anteriores, fue considerablemente mayor a la reportada en el 2000.

En cuanto a las preocupaciones comerciales, durante el 2015 el Comité de MSF recibió 21 nuevas preocupaciones, mientras que ante el Comité de OTC los miembros plantearon 86, el segundo número más alto desde 1995.

De las 513 diferencias que hasta la fecha han tenido lugar entre miembros de la OMC, 44 han estado vinculadas con presuntas violaciones al Acuerdo MSF, mientras que 52 lo han estado con el Acuerdo OTC, lo que implica que solo son más frecuentes las diferencias vinculadas con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (417), el Acuerdo *Antidumping* (114), el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (112) y el Acuerdo sobre la Agricultura (80).

Lo anterior hace comprensible que en los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales, los futuros socios negocien disciplinas que, sin contradecir las normas multilaterales, las complementen, profundicen y detallen, buscando hacer más robustas las reglas que rigen el comercio entre las partes y así evitar, en lo posible, irritantes comerciales relacionados con las mismas. Al pretender ser un acuerdo del siglo XXI, el recientemente concluido Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) no podía ser la excepción.

Considerando la íntima relación existente entre las materias de MSF (aplicable sobre todo en el sector agropecuario) y OTC (sector industrial), el presente artículo ofrece un panorama integral de las disciplinas que fueron negociadas en el TPP en ambos temas, destacando los principales objetivos de los capítulos correspondientes, identificando sus diferencias y deteniéndose en los temas más novedosos, intereses en juego y sensibilidades



de las notificaciones presentadas en 2014 al Comité de MSF de la OMC, aproximadamente, fueron hechas por países en desarrollo. (OMC)

existentes durante la negociación. Adicionalmente, se pretende ofrecer la perspectiva de México sobre dichos capítulos, al haber sido uno de los principales demandantes de disciplinas robustas en el capítulo sobre OTC, pero también con una posición compleja con respecto a la negociación del correspondiente a MSF.

MSF: entre la facilitación del comercio y un nivel adecuado de protección

El capítulo 7 del TPP está dedicado a las MSF y se compone de 18 artículos que abordan aspectos horizontales e institucionales (7.2 a 7.6), temas sustantivos (7.1, 7.7 a 7.9), cuestiones relacionadas con procedimientos de control, inspección y aprobación (7.10 a 7.12), disposiciones sobre facilitación del comercio e intercambio de información (7.15 y 7.16), consultas y solución de controversias (7.17 y 7.18).

En su artículo 7.2 se señala como objetivo del capítulo, entre otros, "proteger la vida y la salud de las personas y los animales o preservar los vegetales en los territorios de las Partes, al mismo tiempo que facilitar e incrementar el comercio". En este caso, el orden de los factores fue deliberado y buscó reflejar que, en primer término, el TPP reconoce el derecho de las partes a fijar un nivel adecuado de protección para garantizar su salud humana, animal y vegetal, aunque también buscando facilitar el comercio agropecuario en la región.

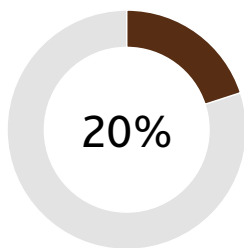
A diferencia de lo que sucede con el capítulo OTC –que incorpora diversas disposiciones del Acuerdo OTC–, el capítulo del TPP sobre MSF se limita a afirmar los derechos y obligaciones contemplados en el Acuerdo MSF y subraya que "nada de lo dispuesto en este tratado limitará los derechos y obligaciones que cada Parte tiene" conforme al acuerdo de la OMC. El contraste entre este enfoque –que implica que las disputas relacionadas con la aplicación del Acuerdo MSF solamente se podrán resolver en la OMC y no podrán ser ventiladas en el TPP–, con el del capítulo OTC es evidente, lo que refleja la gran sensibilidad que prácticamente todos los países –pero sobre todo algunos de los desarrollados como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y Japón– tenían con respecto a la negociación de disciplinas en esta materia.

Producto de este contexto defensivo fue el largo proceso de consultas técnicas cooperativas que se incluyeron en el artículo 7.17 como un paso previo a la posibilidad de someter una disputa vinculada al capítulo al mecanismo de solución de controversias del TPP, así como las transiciones para los temas de equivalencia, auditorías, revisiones a la importación, ciencia y análisis de riesgo (7.18.1.a y b) y las exclusiones totales de los artículos 7.8.6.b (determinación de equivalencia) y 7.9.2 (base científica, objetiva y documentada) con respecto a dicho mecanismo. Estas fueron fundamentalmente impulsadas y defendidas hasta el final de la negociación por Estados Unidos como condición para permitir que el resto del capítulo sí pueda someterse a disputas bajo el Acuerdo.③

Sin embargo, debe destacarse positivamente que el capítulo incluye un buen número de disciplinas que van más allá del Acuerdo MSF, sobre todo en cuanto a la certidumbre en los procedimientos, la transparencia, el intercambio de información y los derechos de petición y réplica de los países exportadores.

En materia de regionalización y equivalencia, por ejemplo, se incluyen disciplinas para obligar a que las evaluaciones correspondientes inicien en un plazo de tiempo razonable (7.7.4 y 7.8.3), se proporcione una explicación o justificación de las razones por las que no se determinó procedente una solicitud (7.7.10 y 7.8.9) o se implementen las medidas tendientes a facilitar el comercio en plazos también razonables (7.7.7 y 7.8.7). De igual manera, los artículos vinculados con auditorías (7.10), revisiones a la importación (7.11) y certificaciones (7.12) son sumamente novedosos e incluyen reglas minuciosas sobre lo que pueden o no exigir las autoridades sanitarias al llevarlas a cabo, eliminando la opacidad, arbitrariedad y discrecionalidad imperante hasta la fecha en esos procesos.

Adicionalmente, algunos preceptos del capítulo son innovadores al dotar de obligatoriedad a las orientaciones relevantes del Comité MSF de la OMC, así como las normas, directrices y recomendaciones internacionales en materia de regionalización (7.7.2), equivalencia



de las restricciones al comercio introducidas desde el 2008 por los miembros de la OMC se han eliminado. (OMC)

(7.8.1), análisis de riesgo (7.9.6.a), auditorías (7.10.3), certificaciones (7.12.3) y transparencia (7.13.2).

En cuanto a temas sustantivos destacan también las siguientes disciplinas que innovan con respecto al Acuerdo MSF: 1) se definen conceptos como análisis, comunicación y manejo de riesgo, medida de emergencia, programa de importación y revisión a la importación (7.1); 2) se detalla el tipo de fundamentación de los análisis de riesgo (7.9.5), se establece la obligación de permitir que los interesados formulen comentarios respecto de los mismos (7.9.4.b), se detallan los pasos y conceptos vinculados con el principio de proporcionalidad (7.9.6) y se establecen prohibiciones para impedir la importación solo porque se esté llevando a cabo una revisión de las MSF (7.9.10); y 3) se insta a considerar extensiones en el período de consulta pública (7.13.4), a proporcionar información detallada en medios electrónicos sobre la base legal de la medida y los comentarios recibidos (7.13.5), a discutir preocupaciones científicas o comerciales con otras partes, así como los enfoques alternativos considerados (7.13.6) y a notificar e informar sobre cambios en el estatus sanitario del país (7.13.11).

Sin duda, la discusión de este capítulo representó uno de los retos más grandes en toda la negociación del TPP, sobre todo por la percepción siempre existente de que los países exportadores netos de productos agropecuarios podían verse favorecidos con disciplinas que redujeran la discrecionalidad al máximo en la adopción de MSF e incluso, prohibieran determinados enfoques regulatorios o MSF particulares (como si sucedió en OTC). Sin embargo, los negociadores pudieron constatar claramente que las disciplinas en la materia son circulares y que todos los países son importadores o exportadores eventualmente, dependiendo del sector o producto respectivo, por lo que a nadie beneficiaba comprometer de más sus facultades regulatorias en la materia. Al final, lo que se logró fue un balance delicado entre mayor certeza y transparencia, sin poner en riesgo el derecho fundamental, soberano y legítimo de cada país para proteger la salud humana, animal o vegetal en sus territorios.

Para México, el resultado fue positivo pues le permitió aumentar el nivel de detalle en ciertos compromisos importantes para proteger sus exportaciones –como la necesidad de que las MSF estén rigurosamente basadas en ciencia–, conservando la posibilidad de recurrir al mecanismo de solución de controversias del tratado para hacerlos observables, al tiempo de que pudo mantener espacio de política regulatoria para expedir y hacer observables MSF en el territorio nacional.

OTC: regular solo cuando es necesario

El capítulo 8 del TPP corresponde a OTC y consta de una parte general compuesta de 13 artículos que contemplan aspectos horizontales e institucionales (8.2, 8.3, 8.4.1, 8.11 y 8.12), temas sustantivos (8.1, 8.5 a 8.8 y 8.13), cooperación regulatoria (8.9), intercambio de información, consultas y solución de controversias (8.4.2 y 8.10). Adicionalmente, el capítulo comprende 7 anexos sectoriales aplicables a: 1) los vinos y las bebidas espirituosas; 2) los productos de tecnología de información y comunicaciones; 3) los farmacéuticos; 4) los cosméticos; 5) los dispositivos médicos; 6) las fórmulas patentadas de alimentos preenvasados y aditivos alimentarios; y 7) los productos orgánicos.

Sin lugar a dudas, este capítulo incluye un conjunto de disciplinas novedosas que van más allá de los derechos y obligaciones existentes a nivel multilateral en el Acuerdo OTC y que crean una nueva categoría de disciplinas vinculantes de última generación conocidas coloquialmente como OMC *plus*, dirigidas en términos generales a reducir o eliminar los obstáculos innecesarios al comercio. En este sentido, desde su primer precepto sustantivo (8.2), el capítulo establece que su objetivo es “facilitar el comercio, incluyendo mediante la eliminación de obstáculos técnicos al comercio, la mejora de la transparencia y la promoción de mayor cooperación regulatoria y buenas prácticas regulatorias”; estos últimos, conceptos que se han ido desarrollando a través del tiempo como resultado de la implementación del Acuerdo OTC.

Y es justo la relación del capítulo con el Acuerdo OTC el primer elemento a destacar en él. El artículo 8.4 señala que se incorporan todos los artículos sustantivos del acuerdo multilateral ahí mencionados, lo que implica que cualquier parte del TPP podrá someter al mecanismo de solución de controversias del Acuerdo cualquier disputa que implique una violación a preceptos del Acuerdo OTC, aunque siempre deberá existir una violación adicional a algún precepto del capítulo. El análisis de las implicaciones de esta relación da para un estudio aparte, pero por lo pronto solo basta decir que esta es una novedad que elimina ambigüedades existentes en otros acuerdos internacionales u otros capítulos del TPP, en donde simplemente se reafirman o confirman los derechos y obligaciones de las partes con respecto a los acuerdos multilaterales respectivos.

En segundo término, es notable la gran cantidad de disciplinas sustantivas de la parte general del capítulo que están destinadas a precisar, complementar o detallar las obligaciones contempladas en el Acuerdo OTC, fundamentalmente con respecto a la definición de normas, guías y recomendaciones internacionales (8.5), los procedimientos de evaluación de la conformidad (8.6), la transparencia y buenas prácticas regulatorias (8.7 y 8.8) y la cooperación regulatoria (8.9). En su conjunto, esos preceptos establecen obligaciones que implican compromisos adicionales a los existentes en el ámbito multilateral entre los socios TPP.

Ejemplos de lo anterior son: 1) la obligación de aplicar los principios contemplados en las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité OTC de la OMC para determinar el alcance del concepto de norma internacional (8.5.2); 2) la prohibición de rechazar resultados de la evaluación de la conformidad solo porque en el territorio de una parte haya más de una entidad de acreditación (6.9.a); 3) los compromisos de notificar a los demás socios TPP todas las propuestas de reglamentos técnicos, aunque sean conformes a las normas internacionales (8.7.9) y de considerar extender el período de consulta pública a 90 días (8.7.14); y 4) la obligación de otorgar normalmente un período de 6 meses entre la publicación y entrada en vigor de un reglamento técnico (8.8.1).

Los 7 Anexos sectoriales incluyen nuevas disciplinas en materia de buenas prácticas regulatorias y materializan las obligaciones del Acuerdo OTC para reducir o eliminar gran parte de los obstáculos innecesarios que se han encontrado a la fecha en esos sectores y que tienen como origen normas, reglamentos técnicos o procedimientos para la evaluación de la conformidad. Ejemplos de lo anterior existen en preceptos que obligan a las partes a permitir etiquetas suplementarias en los contenedores de vino para declarar cierta información comercial (Anexo 8-A.10), a aceptar la declaración de conformidad del proveedor en materia de compatibilidad electromagnética (Anexo 8-B.3), a esforzarse por considerar una solicitud para reconocer la equivalencia de un reglamento técnico de productos orgánicos (Anexo 8-G.4), o bien que les prohíben requerir como condición que un producto farmacéutico reciba autorización comercial en el país de origen (Anexo 8-C.14) o que un producto cosmético esté acompañado de un certificado de libre venta (Anexo 8-D.19).

Finalmente, el capítulo también es novedoso al incluir preceptos institucionales por los que se crea un mecanismo expedito de atención de preocupaciones comerciales específicas (8.10), la creación de un Comité OTC del TPP y puntos de contacto de cada parte (8.11 y 8.12), así como la posibilidad de desarrollar anexos sectoriales futuros (8.13).

Sin duda, la negociación de obligaciones OMC *plus* en este capítulo representó un reto para los países de menor desarrollo relativo (Vietnam, Brunéi y, en menor medida, Malasia, Chile y Perú), que en muchos casos aún están desarrollando sus sistemas de normalización y evaluación de la conformidad para ponerlos en orden con las obligaciones del Acuerdo OTC. Para los países más adelantados, no obstante, el capítulo también representó un reto sobre todo en términos de su relación con el Acuerdo OTC y la posibilidad de ser sujetos de disputas en dos foros independientes sucesivamente y obtener resoluciones contradictorias, aunque también al tener que priorizar los temas que requerían mayor atención a fin de lograr un acuerdo de última generación en materia OTC. La determinación

de los sectores que serían privilegiados con la existencia de anexos sectoriales también fue un desafío para este grupo de países.

En cuanto a México, al contar con un sistema bastante robusto en la materia, su posición permitió formular propuestas que en gran medida favorecieron un capítulo ambicioso y exportar algunas de las buenas prácticas regulatorias que ya aplicaba en forma unilateral, como por ejemplo, la publicación y notificación anual del Programa Nacional de Normalización.

Conclusión

En un entorno internacional en el que las preocupaciones, discusiones y disputas entre socios comerciales están cada vez más vinculadas con la aplicación de normas, reglamentaciones técnicas, sanitarias y fitosanitarias y procedimientos para asegurar su cumplimiento, las disciplinas acordadas en el TPP en materia MSF y OTC arrojan un resultado novedoso, con soluciones creativas, obligaciones y derechos OMC *plus*, así como herramientas que las partes podrán utilizar para buscar reducir el impacto negativo de esas medidas en el comercio futuro en la región.

El propio diseño de esas disciplinas asegura también que, una vez que haya entrado en vigor, el TPP se irá complementando y modernizando con la experiencia que se vaya ganando a través de su aplicación. En cualquier caso, las disciplinas son positivas para México, que cada día se consolida más como un gran exportador de productos industriales y agropecuarios, pero que también comparte el reto de asegurar para sus nacionales la protección de objetivos legítimos, como la salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente o los derechos del consumidor o usuario.

- ❶ En la agenda de cada reunión de los Comités MSF y OTC se incluye una sección que permite que los miembros de la OMC expongan preocupaciones comerciales con respecto a las medidas específicas de otros miembros y que, en su opinión, podrían resultar incompatibles con las obligaciones y principios de los acuerdos respectivos.
- ❷ Aun cuando el aumento de notificaciones y preocupaciones comerciales relacionadas pueda deberse a un mayor conocimiento y aplicación de los acuerdos pertinentes por los países en desarrollo y menos adelantados, ello no impide relacionar el aumento de ambos factores con una tendencia a regular más, incrementando con ello los irritantes comerciales.
- ❸ Todos los tratados comerciales en los que Estados Unidos es parte excluyen los capítulos MSF del mecanismo de solución de controversias de cada uno, con la sola excepción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que este fue un triunfo para los países con posiciones ofensivas, México incluido.



Juan Antonio Dorantes
Abogado, socio del despacho
Aguilar y Loera, S. C.

OPCIONES DE POLÍTICAS INICIATIVA E15

Cooperación regulatoria: lecciones de la OMC y el régimen de comercio mundial

Petros C. Mavroidis

La actual fricción comercial se debe en gran parte a la diversidad regulatoria existente debido a que los mercados contemporáneos están principalmente segmentados a través de barreras no arancelarias. El enfoque de las opciones de política aquí presentadas está centrado en la cooperación y en la coherencia regulatoria en el sistema mundial de comercio.

La intensidad de la cooperación puede variar. Por un lado, puede ser un acuerdo para hablar; por el otro, puede guiar a la adopción de estándares comunes o al reconocimiento de procesos regulatorios equivalentes. Dentro de este rango, la amplitud del margen está dada por el número de actores involucrados, mientras que el nivel de cooperación da cuenta de la intensidad. Los diversos enfoques regulatorios son en parte impulsados por aspectos de economía política, preferencias y prioridades sociales. Las preguntas clave son: ¿por qué promover la cooperación y la coherencia regulatoria? y ¿cuáles son los instrumentos o mecanismos que pueden ayudar a facilitar las tensiones que resultan de la expresión de políticas asimétricas?

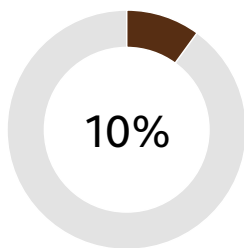
Para abordar estas cuestiones, ICTSD, en sociedad con el Foro Económico Mundial, convocó a un grupo de expertos como parte de la Iniciativa E15. El European University Institute unió esfuerzos en esta tarea. El mandato fue proponer soluciones para mejorar el régimen de comercio mundial. Un enfoque ascendente fue privilegiado debido a que un ángulo descendente tiene limitaciones innatas debido al número de variaciones que la cooperación puede tomar. Este enfoque buscó identificar áreas con problemas debido a la falta de cooperación e investigar mandatos existentes para cooperación en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en acuerdos comerciales preferenciales (ACPR), evaluando la distancia entre niveles de cooperación presentes y deseados.

Dos aspectos del trabajo merecen ser subrayados. Primero, la cooperación involucra la reunión de las comunidades comerciales y regulatorias, que operan aisladas una de otra en muchos escenarios domésticos e internacionales. Un principio de orientación ha sido adelantar propuestas que tienen como propósito superar este espacio. Segundo, el mundo comprende jugadores heterogéneos de capacidades administrativas drásticamente distintas. Los países en desarrollo pueden encontrar mayores dificultades al implementar algunas de las opciones. La necesidad de creación de capacidades es destacada e instrumentos de la OMC, como la Ayuda para el comercio, pueden facilitar la tarea.

Cooperación regulatoria: panorama actual

El objetivo es proporcionar comentarios a la OMC en relación con la manera el modo en la el cual puede servir mejor su carga de trabajo actual y anticipada. Esta perspectiva de comercio, sin embargo, no se agota dentro de los confines del actual mandato o régimen de la OMC. De hecho, hay numerosas iniciativas que se enfocan en la cooperación regulatoria que toman lugar fuera de la OMC, ya sea de manera formal dentro de los ACPR o de manera informal. Como es de esperar, hay mayor actividad e intensidad a nivel de ACPR, especialmente cuando estos han sido concluidos entre actores homogéneos.

La línea de base adoptada aquí es la cooperación en el contexto de dos acuerdos de la OMC: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Estos son los ejemplos de mayor alcance de cooperación regulatoria en la OMC. El tema también ha ocupado espacio dentro del marco de trabajo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, pero el proceso está aún en marcha.



de las exportaciones de los países en desarrollo a los países del G-20 no se materializan debido a medidas no arancelarias. (UNCTAD).

Cooperación regulatoria en el GATT

En el contexto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), los compromisos sobre obstáculos regulatorios fueron realizados con el propósito de asegurar que las reducciones arancelarias no fueran evitadas por medio de la sustitución de instrumentos de política. Después de la fundación de la OMC y el rol decreciente de los aranceles, las disciplinas sobre obstáculos regulatorios tienen una función distinta: son aparatos integradores de mercados. La receta básica bajo el GATT para abordar los obstáculos no arancelarios es la no discriminación, aunque no tiene nada que decir acerca de la calidad de la intervención regulatoria o sobre la diversidad regulatoria.

Cooperación regulatoria en la OMC

La OMC permite nuevas avenidas para integrarse más allá de la discriminación. Los Acuerdos OTC y MSF proporcionan una combinación de disciplinas que promueven el reconocimiento del impacto que el ejercicio unilateral de la autoridad regulatoria puede implicar. La OMC, a través de las disciplinas impuestas por estos dos acuerdos, aborda la calidad de la intervención regulatoria. Más aún, los miembros no son libres para adoptar cualquier medida que ellos consideren adecuada aun cuando esta sea aplicada de manera no discriminatoria.

Los Acuerdos no requieren que los miembros de la OMC adopten, en primer lugar, las mejores políticas. No obstante, cuando los miembros de la OMC actúan unilateralmente en cuanto a políticas que son de la competencia de estos acuerdos deben adoptar la medida menos restrictiva del comercio y basarse en estándares internacionales. Deben asegurar también que la transparencia haya sido observada y permite intervalos entre la publicación y la entrada en vigor de las medidas. Los miembros son motivados a reconsiderar los fundamentos de una intervención, evaluar su impacto y explorar alternativas, todo bajo la iniciativa sobre buenas prácticas regulatorias. También son instados a firmar acuerdos de reconocimiento mutuos o a armonizar sus reglas. Sin embargo, los acuerdos de reconocimiento son firmados de manera rutinaria entre actores semejantes –frecuentemente en el contexto de ACPR– y pocos preparan estándares armonizados para el mundo. La no discriminación, por tanto, permanece en mayor medida como la línea de base para la integración a nivel multilateral entre la mayoría de los miembros. La definición unilateral de políticas continúa siendo el escenario dominante, con la cooperación relegada a los mejores esfuerzos.

Cooperación regulatoria dentro de acuerdos comerciales preferenciales

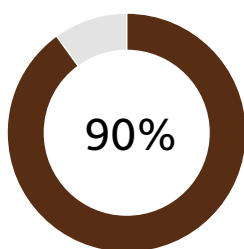
Mientras que los ACPR originalmente abordaban barreras de comercio clásicas, estos han evolucionado en mecanismos que buscan promover la cooperación regulatoria, la cual puede alcanzarse con mayor facilidad entre un subconjunto de miembros de la OMC.

Ejemplos notables de cooperación regulatoria entre países semejantes incluyen: el Consejo de Cooperación Regulatorio de Canadá-Estados Unidos; y el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Trans-Tasman entre Australia y Nueva Zelanda en estándares de alimentos. También hay ejemplos de ACPR que se enfocan en cooperación regulatoria, es el caso de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión.

La cooperación regulatoria entre actores heterogéneos es frecuentemente enfocada en categorías de productos específicas. Los ejemplos incluyen: el Marco de Cooperación Regulatoria China-Unión Europea, centrada en seguridad de productos no alimentarios; y un acuerdo de reconocimiento mutuo firmado entre China y Nueva Zelanda para productos electrónicos.

Clubes con puertas abiertas

Los acuerdos plurilaterales de la OMC son clubes con puertas abiertas. Pueden estar formados por un subconjunto de la membresía OMC en el entendido de que los miembros restantes hayan consentido a una solicitud para tales efectos. Sin embargo, su relevancia práctica a la fecha ha sido limitada a la liberación del mercado de contratación pública. Además, los acuerdos masivos críticos constituyen una técnica de negociación para reducir el impacto de aquellos que se benefician de los resultados sin asumir los costos (*free riders*).



del comercio de los recursos naturales y 80% del comercio de manufacturas se ve afectado por medidas no arancelarias. (UNCTAD)

Opciones de política: de la cooperación actual a la cooperación deseada

Las siguientes opciones de política tienen como objetivo cubrir la distancia entre el nivel actual de cooperación en la OMC y el nivel deseado de cooperación regulatoria. Estas involucran transparencia en la elaboración de políticas, la interacción entre partes afectadas al preparar y adoptar medidas y el establecimiento de foros en donde estas discusiones puedan llevarse a cabo.

Las propuestas pueden ser de ayuda únicamente cuando son inmunizadas con una dosis de realismo. Las opciones son de este modo tan cercanas como es posible a una primera mejor solución. Cabe destacar que el objetivo es diseñar soluciones que puedan encontrar aplicación a través de la frontera y no simplemente entre un conjunto de actores homogéneos.

Las recomendaciones están divididas en categorías institucionales, la primera y segunda opción, y sustantivas, en adelante. Las primeras están dedicadas a asuntos relativos a quién participa y bajo qué condiciones. Las últimas se enfocan en una selección de asuntos que han capturado las mentes de las comunidades regulatorias y de comercio. Estas involucran la mejora de mecanismos y obligaciones existentes.

En el contexto de la categoría institucional, a la fecha, ha sido imposible concluir acuerdos multilaterales sobre asuntos puramente regulatorios. Es más, la cooperación regulatoria es principalmente observada entre actores afines. La promoción de acuerdos plurilaterales y acuerdos masivos críticos por delante de los ACPR debería ocupar un lugar destacado en la agenda de la OMC. De manera simultánea, la cooperación en asuntos de consulta y transparencia, por ejemplo, debe continuar sobre una base multilateral.

El antecedente establecido por el Acuerdo sobre Contratación Pública sugiere que una función del enfoque plurilateral puede ser un instrumento que permita a los miembros de la OMC negociar con asuntos que no están cubiertos por la organización. Uno podría imaginar acuerdos plurilaterales en protección a la inversión o coordinación de políticas monetarias. Estos acuerdos también podrían ser firmados en áreas ya cubiertas por el mandato de la OMC. Desde la perspectiva de la organización, hay una ventaja clara de los acuerdos plurilaterales en el contexto de la OMC sobre los ACPR debido a que los clubes son necesarios para dismantelar los obstáculos regulatorios, pero es de interés de la organización multilateral monitorear los desarrollos en este ámbito.

Promover que se recurra a acuerdos plurilaterales

A la luz de lo anterior, la primer opción de política plantea que la OMC debe promover activamente la cooperación regulatoria dentro de clubes y desarrollar mecanismos que permitan la multilateralización de dichos acuerdos. En este sentido, el establecimiento de plurilaterales sería aprobado a menos que los miembros de la OMC, representando cierto umbral combinado de comercio mundial, por ejemplo del 20%, se opongan. La OMC deberá particularmente fomentar acuerdos plurilaterales que tengan que ver con asuntos que no se encuentran bajo el mandato actual y debería incrementar el flujo de la transparencia desde clubes a la organización.

Acceso más fácil para los negocios

Una reclamo constante expresado por el mundo empresarial es que no tienen un fácil acceso a varios comités de la OMC. Sus preocupaciones no son escuchadas y como resultado las políticas que se supone regulan el comportamiento de los negocios son diseñadas sin ningún aporte de la parte más interesada.

Abrir la OMC a los intereses del mundo empresarial

La segunda opción plantea permitir que los intereses del mundo empresarial se encuentren en una posición en que puedan expresar sus preocupaciones, específicamente en los Comités OTC y MSF. Su participación debe ser alentada y su estatus como observador no debería ser rechazado, a menos que existan razones convincentes. Al diseñar este estatus, la OMC podría inspirarse en el Comité asesor para las empresas y la industria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o el Consejo Asesor de

Empresas de APEC. La representación no debería estar confinada a las áreas cubiertas por los Acuerdos OTC y MSF.

Transparencia

En el contexto de la categoría sustantiva, las obligaciones de transparencia en los Acuerdos OTC y MSF son las de mayor alcance en la OMC: ventanillas únicas, puntos de información e intervalos entre la preparación y la adopción de medidas constituyen innovaciones importantes. La regulación, sin embargo, se extiende a áreas no cubiertas por estos acuerdos y la primera recomendación sustantiva es consolidar todas estas innovaciones en una nueva disposición o acuerdo sobre transparencia.

Es más, hay tres áreas en las cuales las mejoras a la obligación de transparencia puede ser alcanzada: 1) sobre qué deben ser transparentes los miembros; 2) cuánta información debe ser proporcionada; y 3) cuándo debe surtir efecto la obligación de transparencia. Debe requerirse a los miembros de la OMC proveer evaluaciones previas al impacto comercial de sus regulaciones. Ellos también deben observar transparencia "razonada", la cual demanda que los funcionarios de Gobierno ofrezcan explicaciones explícitas de sus acciones y mostrar por qué un curso de acción alternativo fue rechazado. Esto resultaría en una interacción más cercana entre las comunidades regulatorias y comerciales. Finalmente, la comunidad empresarial y la sociedad civil deberán estar implicadas en el proceso en una etapa temprana debido a que la transparencia debe ser integral.

Fortalecer y consolidar las disciplinas de transparencia

La obligación de transparencia actual debe ser consolidada y fortalecida en cinco direcciones: 1) deben identificarse los mecanismos nacionales que tienen el propósito de proporcionar transparencia con respecto a procesos regulatorios nacionales; 2) los miembros de la OMC deben notificar las medidas adoptadas, basadas o no en estándares internacionales; 3) deben explicar el razonamiento detrás de sus medidas; 4) deben involucrar partes afectadas en una etapa temprana del proceso; y 5) deben utilizar un intervalo razonable entre la publicación y la entrada en vigor de una medida que busque perfeccionar la regulación.

Evaluando el impacto comercial de las regulaciones

Evaluaciones previas del impacto comercial de la regulación podría sobreestimar o subestimar correlaciones con otros factores que influyen el resultado del comercio, por lo que es útil acompañar estos ejercicios con evaluaciones posteriores. La iniciativa para dirigir evaluaciones posteriores no debe ser impuesta al regulador original. La idea sería producir evidencia creíble en relación con la operación de una medida. La implementación de esta recomendación podría presentar desafíos en países en desarrollo con capacidades administrativas limitadas. Para superar este obstáculo, las burocracias más avanzadas deben estar preparadas para compartir sus experiencias y comprometerse con el desarrollo de la creación de capacidades. Aquí es donde la iniciativa Ayuda para el comercio puede contribuir para mejorar el nivel de diálogo regulatorio entre miembros de la OMC.

Dirigir evaluaciones posteriores del impacto de medidas adoptadas

Con esto en mente, la cuarta opción de política plantea que la evaluación previa original del impacto comercial de una regulación debe estar acompañada por una evaluación posterior de la medida adoptada. En la medida en que las discrepancias entre el resultado esperado y el impacto observado exista, las administraciones nacionales pueden revisar sus supuestos previos a fin de diseñar regulaciones más eficientes en el futuro.

Implementación de estándares internacionales

La armonización tiene sentido bajo un conjunto particular de condiciones, por lo que sería preferible aspirar a otros instrumentos de integración tal como el reconocimiento. Dichos instrumentos, sin embargo, requieren confianza en relación con las actividades futuras. La armonización, por otro lado, únicamente recurre a la implementación de normas acordadas. Las disciplinas OTC y MSF requieren estándares internacionales en la medida en que sean adecuados a la luz del objetivo buscado por los miembros de la OMC. Hay espacio para mejora en dos aspectos.

En primer lugar, la noción de estándar internacional debe ser aclarada a fin de limitar discreción por parte de los paneles. En segundo lugar, la asignación actual de la carga de la prueba puede actuar como un incentivo para olvidar estándares internacionales donde podrían haber sido adecuadamente utilizados. El Órgano de Apelación ha determinado que los demandantes llevan la carga de demostrar que una medida nacional es consistente con un estándar internacional, independiente de si el miembro de la OMC se ha desviado o no del estándar internacional.

Promover el uso de estándares internacionales

La quinta opción de política, por tanto, establece que el artículo 2.4 del OTC y 3.1 de MSF pueden ser fortalecidos. Además de promover el uso de estándares internacionales en principio, podría aclararse que las desviaciones de estándares internacionales deberían estar justificadas por el estado divergente. Las disposiciones deben ser enriquecidas de dos maneras: a través de una referencia explícita de la Decisión 2000 y a través de la adición de una lista indicativa de organizaciones de normalización.

Estándares privados

Los estándares privados han proliferado en años recientes. Para los países en desarrollo, este fenómeno ha agregado costos de transacción y representa un obstáculo a la integración en la cadena de valor. Hay un alto grado de incertidumbre acerca de si los estándares privados están disciplinados por la OMC o si estos descansan fuera de su ámbito.

Aclarar la relevancia de la OMC sobre los estándares privados

Como consecuencia, la sexta y última opción de política plantea que la OMC debería concentrarse en estándares privados al dedicar un foro para abordar la materia. La organización podría inspirarse en el Grupo de Trabajo sobre Ajustes Fiscales en Frontera de 1971, el cual fue establecido para aclarar el GATT con respecto a los impuestos que legalmente podrían ajustarse en una transacción comercial. En vez de continuar a lo largo del enfoque descendente actual, sería más oportuno enfocarse en negociaciones de sector específico y tratar de extrapolar elementos de experiencias exitosas previas a los nuevos sectores bajo discusión.

Prioridades y siguientes pasos

Una manera apropiada de racionalizar la calidad de las intervenciones regulatorias es ver los mejores ejemplos. Aumentar la transparencia en la OMC será un paso decisivo en esta dirección. La transparencia razonada debe volverse una prioridad. Es a través de este mecanismo que el comercio y las comunidades regulatorias serán reunidas, lo que se volverá uno de los pilares de la OMC.

El objetivo recae en una innovación institucional que promueva la cooperación regulatoria a través de la membresía de la OMC sobre una base sostenible. Las iniciativas actuales emprendidas en el contexto de los comités OTC y MSF deben ser fomentadas. Aunque no hay razón para restringirse únicamente a los asuntos cubiertos por estos Acuerdos, sino que deben ser reproducidos y mejorados.

De manera alternativa, la OMC podría contemplar establecer un Grupo de Trabajo sobre Transparencia en donde las propuestas encuentren un lugar para el debate y la deliberación. Para que la comunidad internacional obtenga nuevas ganancias de la integración del mercado, necesita entender las razones para intervenir, evaluar los intentos por regular asuntos comparables o similares y promover soluciones más eficientes. La membresía en esta tarea puede variar dependiendo de varios factores. La OMC debe proporcionar el techo común. Debe agregar una función semejante a un régimen de intercambio de información que cubra todas las formas de cooperación regulatoria y debe desarrollar criterios para seleccionar asuntos de cooperación que puedan avanzar del club a un nivel multilateral.^①



Petros C. Mavroidis
Profesor de la Cátedra de
Derecho Edwin B. Parker,
Columbia Law School.

① Este artículo ha sido adaptado de un estudio más extenso que se puede encontrar en Mavroidis, P. (2016). *Regulatory cooperation: lessons from the WTO and the world trade regime*. Ginebra, Suiza: ICTSD & WEF.

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

La regulación chilena sobre etiquetado y publicidad de los alimentos como instrumento contra la obesidad

Sofía Boza y Macarena Espinoza

La nueva regulación chilena sobre etiquetado de alimentos, la cual tiene como finalidad mitigar la elevada tasa de obesidad en el país, ha sido sujeto de amplia discusión al interior del Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. El presente artículo tiene como objetivo exponer la fundamentación, evolución y estado actual de dicha discusión, así como de la propia regulación.

La Ley 20.606 sobre composición nutricional de alimentos y su publicidad de Chile, denominada "Ley de Alimentos", ha generado controversia desde su publicación en 2012 –y su entrada en vigor en junio de 2016– no solo a nivel de la industria nacional, sino también en la esfera de las relaciones de comercio multilateral.

El propósito de la Ley es luchar contra la creciente obesidad, principalmente infantil, en Chile. Este es uno de los problemas de salud pública con mayor prevalencia en el país, sobre todo en los estratos socioeconómicos más vulnerables. De hecho, conforme a los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud, un 64,5% de los chilenos tiene exceso de peso, correspondiendo un 25,1% de los casos a obesidad, la que afecta en mayor medida a mujeres y personas con bajo nivel educacional. Esto deriva en serias consecuencias tanto para la esperanza como para la calidad de vida individual e implica costos sociales relacionados con la provisión de salud y la reducción de la productividad laboral.

Sin restarle gravedad, cabe mencionar que la situación nutricional chilena es asimilable a lo que ocurre en otros países de la región. En México, más del 70% de la población padece sobrepeso u obesidad, mientras que en Perú esta cifra asciende al 68%. Otros países como Argentina, Uruguay o Colombia tienen cifras un poco más moderadas, pero en torno al 50% de la población.

Estudios realizados en México indican que el sobrepeso y la obesidad están vinculadas a una carga mayor de enfermedades crónicas no transmisibles, responsables del 75% de las muertes totales y del 68% de las discapacidades de ese país (Rtveladze *et al*, 2012). Investigaciones realizadas en Chile demostraron que el ausentismo laboral aumenta en los sujetos con un índice de masa corporal elevado, siendo de un 25% en personas obesas y 57% en obesos severos (Zárate *et al*, 2009). Vázquez y López (2002), por su parte, han cuantificado que las dos terceras partes de los costos de la obesidad son indirectos, asociados a incapacidad laboral y mortalidad prematura.

En este contexto, la Ley de Alimentos se propone limitar las ventas de productos calificados altos en nutrientes nocivos, grasas saturadas, sodio y azúcar, además de calorías. Para ello se contempla la imposición obligatoria en los envases de los productos alimenticios de un etiquetado que incluya la leyenda "alto en" cuando se sobrepasen ciertos límites reglamentados en la nueva normativa (tabla 1). Dichos límites fueron establecidos por porciones de 100 gr o 100 ml para alimentos sólidos o líquidos, respectivamente. Además, para su elaboración se utilizó como referencia lo recomendado por el *Nutrient Profile Model*, publicado por la Organización Panamericana de la Salud.

La ley, además establece que dichos productos no podrán ser vendidos en establecimientos de educación parvularia, básica o media. Tampoco podrán ser publicitados teniendo como objetivo un público menor a los 14 años, ni se le podrá entregar muestras gratuitas u otros "ganchos comerciales". Lo anterior se justificaría dado que la población infantil en Chile es uno de los grupos en especial riesgo por el sobrepeso y la obesidad, con un gran aumento en su incidencia en los últimos años. Además, se entiende que como consumidores

Tabla 1. Límites máximos establecidos exentos de rotulación para alimentos de producción nacional e importados en Chile.

	Energía	Sodio	Azúcares totales	Grasas saturadas
Alimentos sólidos	275 (Kcal/100 g)	400 (mg/100 g)	10 (g/100 g)	4 (g/100 g)
Alimentos líquidos	70 (Kcal/100 ml)	100 (mg/100 ml)	5 (g/100 ml)	3 (g/100 ml)

Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos, Decreto N° 13, 2015.

resultan más fácilmente influenciables, dado que les cuesta visualizar las consecuencias a mediano y largo plazo de sus acciones. Por ello, se considera que se debe evitar un fácil acceso a los productos que tienen un alto nivel de los considerados nutrientes nocivos.

Inconformidades en la OMC

Al tratarse de una regulación relativa a la calidad alimentaria, a la cual se someterían tanto los productos nacionales como importados, la Ley de Alimentos pertenece al ámbito del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Dicho acuerdo tiene como objetivo garantizar que los países miembros puedan establecer los requisitos necesarios a las importaciones para proteger la seguridad nacional, prevenir prácticas engañosas, proteger la salud y seguridad humana, la vida y la salud animal y vegetal y el medio ambiente sin que se generen obstáculos innecesarios al comercio.

Con dicho fin, el Acuerdo OTC establece una serie de principios que deben ser considerados por los países miembros en sus regulaciones: no discriminación, armonización, equivalencia y reconocimiento mutuo, transparencia, asistencia técnica y trato diferenciado, así como la ya mencionada prevención de obstáculos innecesarios al comercio. En este sentido, tratando de promover la transparencia y la construcción de consenso, se establece el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC), el cual constituye un espacio de diálogo en donde se recogen las preocupaciones de los países miembros sobre las normas impuestas por otros miembros.

En marzo de 2013, en sesión del Comité OTC, ocho miembros de la OMC, Estados Unidos, México, Unión Europea, Argentina, Colombia, Guatemala, Canadá y Perú, plantearon su preocupación por el contenido de la Ley de Alimentos de Chile. A nivel general, si bien los países reconocieron como legítimo el objetivo de Chile de proporcionar información nutricional que contribuya a la reducción de problemas de salud pública tan relevantes como la obesidad, consideraron que las acciones propuestas en la Ley no eran las más adecuadas.

Otros países de la región habían implementado previamente iniciativas alternativas. Ecuador implantó en 2014 un nuevo sistema de etiquetado basado en la “semaforización” de productos comestibles. México optó por gravar con un impuesto especial los alimentos con alto contenido calórico. Sin embargo, lo propuesto por Chile en la nueva Ley de Alimentos diverge de las iniciativas señaladas, siendo una estrategia innovadora tanto a nivel nacional como internacional, ya que es la primera en su tipo que contempla los siguientes aspectos: por una parte, busca informar al consumidor sobre el contenido de nutrientes críticos a través de la implementación de una etiqueta de advertencia, utilizando límites máximos permitidos de estos en porciones de 100 gr; por otra parte, regula el entorno escolar prohibiendo la venta y publicidad en establecimientos educacionales de aquellos alimentos que posean la etiqueta de advertencia; y, finalmente, regula la publicidad dirigida a menores de 14 años de estos mismos alimentos en medios de comunicación masiva, junto con la utilización de ganchos comerciales que limiten su consumo.

Las críticas presentadas a la Ley de Alimentos por los países miembros de la OMC se basaron, principalmente en: a) falta de pruebas científicas suficientes sobre cuál es el umbral de riesgo relativo a nutrientes nocivos para el público general, dadas las particularidades de cada individuo; b) se produciría una discriminación de las empresas extranjeras debido a que tendrían que adaptar los envases de sus productos única y específicamente para el mercado chileno; c) la notificación de la medida (enero de 2013)

Figura 1. Nuevo etiquetado chileno de advertencia para alimentos que superen el umbral de nutrientes críticos.



Fuente: Elaboración propia a partir de Reglamento Sanitario de los Alimentos, Decreto N° 13, 2015.

y su fecha de entrada en vigor prevista (julio de 2013) no distaban lo suficiente como para posibilitar la consideración de las observaciones del resto de países miembros, además de que la información a disposición era insuficiente; y d) existencia de normativa internacional de referencia, contenida específicamente en el Codex Alimentarius, sobre indicaciones nutricionales de los alimentos que serviría para los fines perseguidos por Chile, pero resultando menos lesiva. Con todo ello se sugería una transgresión de los principios de prevención de obstáculos innecesarios, no discriminación, transparencia y armonización.

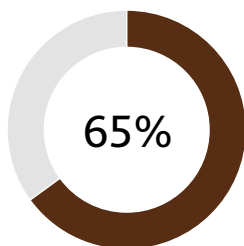
En las siguientes reuniones del Comité, celebradas durante 2013, 2014 y 2015, los países miembros han continuado planteando de manera regular preocupaciones sobre la Ley de Alimentos, uniéndose a la discusión nuevos actores como Brasil, Australia, Costa Rica y Suiza. Además de la insistencia en los puntos previamente descritos, se ha manifestado que el tipo de etiquetado propuesto inicialmente por Chile para identificar los nutrientes nocivos, dada su similitud a una señal de tráfico STOP, podría llevar a los consumidores a clasificar como negativas ciertas categorías de alimentos. Lo mismo sucedería con la leyenda "exceso de" (más el nombre del nutriente nocivo) que originalmente se proponía se incluyera en el etiquetado. Ambas críticas se tuvieron en cuenta en el diseño del etiquetado final, el cual corresponde a un octágono negro con la leyenda "alto en", acompañada de la referencia al nutriente que se excede (figura 1).

Algunos países también han argumentado que la nueva reglamentación podría estar infringiendo no solo el Acuerdo OTC, sino también el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio debido a que de manera indirecta se prohíbe el uso de personajes animados –distintivos de algunas marcas– al no poder hacer publicidad dirigida a niños. Las autoridades chilenas han señalado que esto implica una oportunidad para las empresas de innovar con respecto a la imagen y publicidad de sus productos. La industria no comparte dicha visión y observa con preocupación su aplicabilidad (Desarrollando Ideas, 2016).

La réplica chilena

Chile, por su parte, ha presentado ante el Comité OTC sus argumentos en favor de la Ley, aduciendo la necesidad de atender el grave problema que representa la obesidad en el país, calificándola como "epidemia". Se sostiene que el consumidor debe poder tomar decisiones informadas con respecto a los productos alimenticios que se le ofrecen en el mercado, por lo que las autoridades chilenas consideran necesario utilizar un etiquetado que sea de fácil comprensión.

No obstante la convicción en su posición, Chile ha mostrado una actitud abierta al diálogo. De hecho, el borrador inicial de la Ley experimentó distintas modificaciones debido a presiones de la industria nacional, a observaciones realizadas por la Contraloría General de la República y al cambio de autoridades en 2014. No fue sino hasta fines de junio del 2015 que se publicó en el Diario Oficial la actual versión de la modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos, la que da operatividad a la Ley de Alimentos y que rige desde junio de 2016. El borrador de esta versión fue notificado a la OMC en agosto de 2014,



de la población chilena tiene exceso de peso. Esta cifra asciende al 68% en Perú y al 70% en México.



Sofía Boza

Académico del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agronómicas y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.



Macarena Espinoza

Licenciada en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Chile.

recibiéndose 12 sets de comentarios de otros países miembros y 16 del sector privado, en los cuales se reiteraban las preocupaciones hasta ahora mencionadas.

Con el fin de dar respuesta a las inquietudes tanto nacionales como internacionales, el Ministerio de Salud publicó un documento oficial en el que se indica que la propuesta de Reglamento se notificó adecuadamente a la OMC, considerando un período de tiempo oportuno, por lo que no se transgrede el principio de transparencia. En relación con la falta de evidencia que fundamenta la Ley, se presentan una serie de argumentos de carácter científico y se mencionan ejemplos como la relación directa entre una elevada ingesta de sodio y su impacto en la hipertensión arterial. Además, los altos niveles de sobrepeso y obesidad y sus comorbilidades asociadas son defendidos como un objetivo legítimo para la Ley. También se hace mención a la importancia de facilitar la comprensión de la información nutricional para la mejor selección de alimentos, mostrando estudios que señalan que el diseño del etiquetado frontal debe ser sencillo debido a las dificultades de la población para procesar la gran cantidad de información de los envases en un corto tiempo, entre otros argumentos presentados en el documento.

La publicación de la modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos por parte de las autoridades chilenas sucedió de manera casi paralela a la revisión de la política comercial que Chile debió enfrentar en junio de 2015 en la OMC. Buena parte de las consultas a responder estuvieron relacionadas con la Ley de Alimentos. De hecho, la relevancia del tema llevó a que en su declaración final al término del encuentro, la representación de Estados Unidos afirmara que el país mantenía su preocupación con respecto a ciertos elementos en la Ley, los cuales tenían en su opinión el potencial de "confundir a los consumidores" e impactar negativamente en las exportaciones del país. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que la nueva regulación reduciría en US\$ 250 millones sus exportaciones de preempaquetados.

Si bien aún es pronto para tener claridad sobre cuál será el impacto de la Ley en términos comerciales, existen algunos antecedentes al respecto. Un caso a destacar es el de la empresa italiana Ferrero. Uno de sus productos estrella, Kinder Sorpresa, que corresponde a un huevo de chocolate que contiene un juguete en su interior, al superar los límites de nutrientes críticos y utilizar un gancho comercial, no podrá ser vendido en Chile tal y como hoy se conoce. Ello ha generado bastante polémica, ya que, según lo argumentado por la empresa, el juguete del chocolate no debe ser considerado como un gancho comercial para atraer el consumo de niños, porque, desde sus inicios, el objeto es parte esencial e integral del producto, con el cual constituye una sola unidad.

En definitiva, aun cuando la entrada en vigor de la Ley de Alimentos de Chile ya es una realidad, la polémica en torno a la misma en el ámbito de las relaciones internacionales de comercio parece estar lejos de zanjarse. Esto no resulta extraño si se piensa que la Ley chilena sería la más restrictiva hasta el momento en materia de etiquetado y publicidad de alimentos y si bien el mercado nacional es relativamente reducido, la nueva regulación podría ser un ejemplo a seguir para otros países de la región. De hecho, en Perú se está proponiendo una iniciativa similar a la chilena, restringiendo la venta de productos altos en nutrientes críticos.

Asimismo, la particular tecnicidad del tema y la siempre relativa ambigüedad del Acuerdo OTC en lo relativo al concepto de "necesidad" de las medidas complican todavía más la discusión. Al respecto, algunos medios ya señalan que la nueva Ley de Alimentos podría derivar en la primera controversia de Chile como demandado en el ámbito del Acuerdo OTC, siendo indicio de ello la ya mencionada reiteración del asunto en el Comité OTC. Dicho escenario sería especialmente difícil para uno de los países con mayor apertura al comercio internacional del mundo y exportador neto de productos alimenticios.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

Normas laborales en el Acuerdo de Asociación Transpacífico: una perspectiva desde Chile

Pablo Lazo-Grandi

Chile, por medio de sus negociaciones de acuerdos internacionales, ha acogido la política de cláusulas laborales como expresión de una visión que combina los objetivos de trabajo decente y empresas sostenibles, eficientes y competitivas. En este contexto, el siguiente artículo aborda los objetivos, la historia y el contenido laboral del TPP, a la vez que da cuenta sobre algunos elementos de cooperación que se incluyen en el Acuerdo.

La inclusión de normas laborales en los acuerdos de libre comercio no deja de ser controversial. Sin embargo, desde que por primera vez se agregaran en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, al día de hoy se registra un aumento notable de cláusulas sociales incorporadas en acuerdos comerciales. Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que a diciembre de 2015, 76 acuerdos comerciales tenían cláusulas o acuerdos laborales, abarcando 135 economías con una tendencia al alza.

Considerando que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) agrupa a 12 países de tamaño económico, geografía, ideología predominante, cultura, religión e idioma tan diferentes se estima que el acuerdo alcanzado por los negociadores sobre la inclusión de los temas laborales sin duda constituirá un hito en la materia.

Objetivos laborales del TPP

Los objetivos laborales declarados por el acuerdo se encuentran en el preámbulo y plantean el compromiso de las partes a: "establecer un tratado regional integral que promueva la integración económica... contribuir al crecimiento económico y beneficios sociales, crear nuevas oportunidades para los trabajadores y los negocios, contribuir a elevar los estándares de vida, beneficiar a los consumidores..."; "fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados globales y mejorar la competitividad de sus economías..."; "apoyar el crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas..."; "establecer un marco legal y comercial predecible..." y "proteger y hacer cumplir los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y estándares de vida, fortalecer la cooperación y la capacidad de las partes en los asuntos laborales".

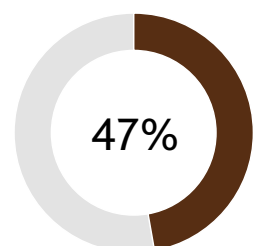
De este modo, quedó plasmado en el TPP el propósito de las partes de impulsar empresas exitosas, productivas y competitivas, promoviendo en especial a sus pequeñas y medianas empresas, proporcionando marcos legales y los derechos laborales.

Historia y desarrollo del proceso negociador

El TPP surge como un ambicioso proyecto de integración en la región Asia-Pacífico, cuyas negociaciones se remontan al acuerdo original suscrito por Chile, Nueva Zelandia y Singapur, al cual se adhirió posteriormente Brunei Darussalam. Este fue suscrito en 2005 y en 2010, y tras aplicar una cláusula evolutiva, se incorporó Australia, Estados Unidos y Perú, lo que generó una renegociación integral que tuvo lugar en marzo de 2014 en Australia. A medida que avanzaba la renegociación se sumó Vietnam, Malasia, Canadá, México y, por último, Japón, por lo que el acuerdo final, hoy conocido como TPP, fue suscrito el 5 de octubre de 2015 por 12 países. Cabe destacar que todos los países firmantes son miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Contenidos del Acuerdo

En cuanto a la sustancia del TPP, las partes afirman sus obligaciones como miembros de la OIT, con especial referencia a aquellas establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998. Si bien no se innova con respecto a esta, sí es interesante la referencia explícita de que no se hará un uso proteccionista de las normas del trabajo.



del empleo total de América Latina y el Caribe está en la informalidad. (OIT)

El Acuerdo establece, además, que cada parte adoptará y mantendrá en su normativa interna y en la práctica los derechos establecidos en la Declaración de la OIT y hará cumplir su legislación laboral interna en forma efectiva. La expresión "derechos", que sustituye a "principios" en otros acuerdos, enfatiza el carácter jurídico que tienen los derechos laborales fundamentales.

Adicionalmente, cada parte deberá adoptar y mantener normas y prácticas que regulen condiciones aceptables de trabajo con respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. También se establece la cláusula de "no derogación", lo que obliga a las partes a no debilitar o reducir su legislación interna a fin de fomentar el comercio o la inversión. Dado el carácter comercial del acuerdo, estas obligaciones solo pueden ser invocadas en caso que afecten el comercio o la inversión entre las partes.

Dentro de las innovaciones de este capítulo aparece de forma explícita el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo forzado, incluido el trabajo infantil forzado u obligatorio, y cada parte se compromete a desalentar, a través de las iniciativas que consideren apropiadas, la importación de mercancías provenientes de otras fuentes, producidas, en su totalidad o en parte por trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio (artículo 19.6).

Las partes se comprometen además a alentar a las empresas a adoptar de manera voluntaria iniciativas de responsabilidad social corporativa en cuestiones laborales que han sido aprobadas o son apoyadas por esa parte. Hay que tener en cuenta que en virtud del compromiso asumido en este capítulo, las partes asumen obligaciones tanto como países huéspedes de inversión, así como países donde las empresas multinacionales tienen su sede matriz.

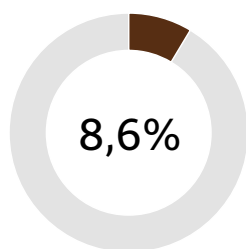
Complementando las disposiciones de compromisos sustantivos, se estimó necesario contemplar mecanismos procesales que garanticen procedimientos administrativos o judiciales. De este modo, las partes se obligan a que dichos procedimientos estén disponibles, conforme a su derecho interno y que sean justos, equitativos y transparentes. Se aseguran procesos públicos, sentencias que den razones de sus decisiones, sin demoras injustificadas y con recursos frente a decisiones adoptadas y que respeten la especificidad de cada parte. Finalmente, se asegura que estas decisiones serán efectivamente cumplidas en el menor tiempo posible y se establece que ninguna disposición del capítulo laboral servirá para reabrir un asunto que ya ha sido juzgado.

Un elemento importante lo constituyen los mecanismos de comunicaciones públicas que permiten una mayor participación pública. De acuerdo a este mecanismo, los puntos de contacto de cada parte deberán dar respuesta a estas comunicaciones, disponiendo plazos y procedimientos. Además, las comunicaciones y sus resultados deberán ponerse a disposición del público y de las otras partes, lo que otorga un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas relevante. El capítulo laboral también fija mecanismos de cooperación para compartir experiencias y buenas prácticas entre sus miembros.

La institucionalidad contempla puntos nacionales de contacto de cada parte, así como un Consejo Laboral integrado por representantes de Gobierno de alto nivel que se reunirá en forma periódica. El carácter transatlántico del acuerdo obligará, además, a métodos innovadores en materia de comunicaciones y tecnología para hacer efectivas estas reuniones.

Otra disposición novedosa es el mecanismo de diálogo cooperativo laboral, el cual se puede solicitar cuando exista algún asunto entre las partes, a través de los respectivos puntos nacionales de contacto designados, lo que debe hacerse por escrito y señalando cómo el tema, cuando sea relevante, afecta al comercio o a la inversión. Como resultado de este diálogo se podrá decidir, por ejemplo, un plan de acción.

Adicionalmente, el capítulo laboral contempla en el artículo 19.15 un mecanismo de consultas laborales para "resolver cualquier asunto que surja de este Capítulo" y que



de los niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil a nivel mundial se encuentran en América Latina y el Caribe, lo que representa 12.5 millones de personas. (OIT)

constituye un paso previo formal antes de recurrir al mecanismo de solución de diferencias del capítulo 28 del Acuerdo. En caso de que no llegar a una solución, se puede acudir al mecanismo general de solución de controversias del TPP, el cual contempla expertos en asuntos laborales para integrar los paneles. Todos los compromisos de este capítulo quedan sujetos a los procedimientos de solución de controversias del Acuerdo.

Cooperación de cara al siglo XXI

Dentro de la larga lista de temas sugeridos para la cooperación deben destacarse algunos que merecieron particular atención. Por una parte, se consideró en forma especial el fomento de la igualdad de las mujeres, la eliminación de la discriminación en su contra y de sus intereses de empleo. Otro tema que mereció especial alusión, relacionado con las cadenas globales de suministro, fue el intercambio de información y el diálogo relacionado con las condiciones de empleo de las empresas multinacionales que operan en dos o más partes con organizaciones de trabajadores representativas en cada parte, disposición igualmente innovadora. Hubo igualmente un proceso interesante de discusión con sectores sindicales y empresariales en las diversas rondas de negociación.

La amplia agenda de cooperación y sus variados mecanismos y la actitud de colaboración demostrada por todos los actores a lo largo de la negociación permitió un proceso interesante de maduración entre las partes para entender mejor sus realidades. La revolución digital en marcha, el avance de la robótica, la inteligencia artificial que se asoman a pasos agigantados en el siglo XXI podrán ser abordados de manera constructiva y colaborativa en este foro de una forma mucho más directa.

Perspectiva desde Chile

Los Gobiernos democráticos han realizado sucesivas reformas sustantivas al Código del Trabajo, particularmente en derechos colectivos como libertad sindical, negociación colectiva y específicamente el derecho a huelga, reformas que se han llevado a cabo estrictamente por voluntad política, con mandatos previos otorgados a cada gobernante.

En el ámbito comercial, Chile ha firmado 26 acuerdos con 64 economías en cuatro continentes y tiene activa participación en foros multilaterales y plurilaterales y ha suscrito plenamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que nos obliga a una visión holística de las metas a cumplir hacia el 2030, particularmente en trabajo decente y empresas sostenibles.

La participación de Chile en APEC y en los tratados de comercio suscritos con sus economías demuestra la creciente importancia que para nuestro desarrollo ha tenido dicha región, la que sobresale por su dinamismo económico y su apertura comercial. Por estas razones, Chile ya ha suscrito acuerdos de libre comercio con Australia, Brunei, China, Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam, así como con Canadá, Estados Unidos y Perú. En la casi totalidad de sus acuerdos Chile ha solicitado y obtenido compromisos laborales, posición que asumió tempranamente para asegurar una coherencia entre los temas de comercio internacional con los compromisos sociales, laborales y ambientales.

Para Chile, los compromisos adquiridos en el TPP reflejan en materia laboral una política de continuidad con su compromiso inalterable por los derechos laborales fundamentales y con el trabajo decente en el marco de su apertura comercial.

Desde la visión de Chile, el acuerdo garantiza un mayor respeto de los derechos laborales con mecanismos innovadores, al tiempo que favorece una interesante agenda de cooperación. Al establecer compromisos comunes se reduce el riesgo de distorsión que significan acuerdos de diferente lenguaje e intensidad en la materia. Este avance podría constituirse en un referente a futuro por la importancia que reviste el acuerdo comercial al consagrarse como el bloque comercial más grande a escala mundial.

Gracias a su apertura comercial, Chile ha aumentado exponencialmente sus exportaciones protegidas por acuerdos comerciales, lo que ha beneficiado a su economía. Estudios

muestran un aumento del empleo asociado a los sectores exportadores, así como en sus respectivas cadenas de suministro. Igualmente, se ha desarrollado evidencia de un mejoramiento de las condiciones de trabajo asociadas con sectores ligados a los mercados internacionales. Estos desarrollos han sido acompañados de un proceso gradual y persistente de mejoras de la legislación laboral desde 1990, de los procedimientos de inspección del trabajo y de los sistemas de justicia laboral, así como de un aumento en las remuneraciones y en la disminución de la pobreza.

El TPP en su conjunto está destinado a crear más puestos de trabajo y a aumentar el nivel de las expectativas de las condiciones laborales y sus derechos consiguientes, lo que naturalmente depende asimismo de la economía global y nacional.

Los sectores exportadores se han mostrado particularmente conscientes de que los consumidores de los mercados globales, independiente de que haya o no cláusulas laborales, son cada día más exigentes con respecto del modo en que se desarrollan los procesos productivos de bienes y servicios, por lo que se advierte su preocupación de que en la cadena productiva no existan brechas en materia de cumplimiento de normas laborales. Se estima que ello implica riesgos y al efecto existe una amplia gama de normas paralelas propias del mundo de los negocios que también obligan al mejoramiento de las condiciones de trabajo como condición de competitividad internacional. El capítulo laboral del TPP va en esa misma línea.

Desafíos que emanan de las negociaciones

Tanto el proceso de negociación como la ratificación e implementación del TPP conllevan desafíos de importancia, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Implica consensuar agendas internas para dar cuenta de los compromisos adquiridos en las negociaciones y velar por el cumplimiento de las normas laborales, con especial cuidado de los mecanismos de inspección del trabajo. Los procedimientos previos de ratificación han demostrado una particular atención de congresistas en los países suscriptores del TPP y en el curso de este proceso habrá sin duda un cuidadoso examen de los temas laborales de dichos países. Algunos países tienen planes de acción específicos acordados con Estados Unidos, Brunei, Malasia y Vietnam, cuyo proceso de desarrollo será especialmente tenido en consideración al momento de la discusión del TPP en el Congreso estadounidense. Luego vendrá la agenda de instalar la institucionalidad laboral del TPP y dar curso a los canales de participación de los actores sociales. Junto con ello habrá un momento en que deberá evaluarse si los objetivos laborales del TPP han avanzado y en qué medida.

El capítulo laboral contribuye a garantizar la existencia y mayor aplicación de los derechos laborales universalmente aceptados, mejorar los mecanismos de inspección del trabajo o sistemas judiciales con contenidos innovadores en determinadas áreas. De esta manera equilibra el TPP en su conjunto con los beneficios comerciales y de inversión que se recogen en los diferentes capítulos para alentar el comercio y la inversión. Refleja el entendimiento común de partes muy disímiles y establece un nuevo referente de la cláusula social. Finalmente, el capítulo es consistente con los valores dimanantes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente con los compromisos de trabajo decente y empresas sostenibles.^①

① Las opiniones vertidas en este artículo no reflejan necesariamente la opinión del Gobierno y solo las del autor.



Pablo Lazo-Grandi
Abogado, actual agregado
laboral de Chile ante la OIT y
otros OO.II. en Ginebra.

OPCIONES DE POLÍTICAS INICIATIVA E15

Repensando a futuro las disciplinas para las subvenciones

Gary Horlick y Peggy A. Clarke

Las subvenciones son un instrumento crítico en la caja de herramientas que los Gobiernos utilizan para lograr sus objetivos de política y juegan un rol clave en los ajustes socioeconómicos y las fallas del mercado. Sin embargo, críticos apuntan a las ineficiencias y a las distorsiones que pueden crear, sus consecuencias distributivas perversas y el impacto negativo que pueden tener en el medio ambiente.

En un mundo cada vez más interdependiente, abordar las externalidades negativas y los efectos de "empobrecimiento del vecino" de las subvenciones mientras se mantiene su función correctiva de mercado, el espacio de política para desarrollo y su rol al entregar bienes públicos esenciales es indispensable desde una perspectiva de desarrollo sostenible.

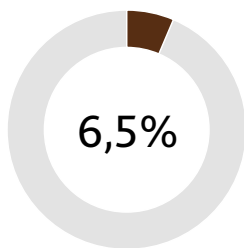
La comunidad internacional ha intentado por mucho tiempo abordar las subvenciones, actualmente bajo el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC). Sin embargo, una nueva mirada es necesaria debido a que la economía global, las prácticas gubernamentales, los planteamientos de desarrollo y los desafíos ambientales han evolucionado desde que las normas multilaterales sobre subvenciones fueron enmarcadas dos o tres décadas atrás. Con este propósito, ICTSD y el Foro Económico Mundial reunió a un grupo de expertos en la Iniciativa E15 para analizar el rol de las subvenciones y las disciplinas internacionales.

En el presente artículo, las subvenciones son definidas como un subconjunto de intervención gubernamental (o inacción) en el mercado. Mientras que el Acuerdo SMC establece disciplinas sobre el uso de las subvenciones en los bienes, casi no hay disciplinas multilaterales en servicios y el sector de agricultura recibe un trato diferente. Las opciones de política aquí presentadas están basadas en la perspectiva de que las subvenciones para la agricultura y los servicios deben estar sujetas a las mismas o similares disciplinas que los bienes y tienen por objetivo sugerir nuevas direcciones en la discusión e implementación de políticas futuras.

Argumentos y contraargumentos para disciplinar las subvenciones

Las propuestas siguientes provienen de una evaluación que plantea que los argumentos para disciplinar el uso de las subvenciones son más sólidos que los contraargumentos, ya que pueden distorsionar el comercio, la competencia y las decisiones de inversión. De hecho, algunas han probado ser dañinas para el medio ambiente; pueden guiar a un uso ineficiente de los recursos, instar a guerras de subvenciones; incrementar la brecha de desarrollo entre naciones, entre otros. Adicionalmente, ya hay en curso una variedad de disciplinas sobre subvenciones, lo que implica un consenso internacional con respecto a que ciertas disciplinas son benéficas.

No obstante lo anterior, existen buenos argumentos en contra de la implementación de disciplinas a las subvenciones. Alan Sykes (2010) plantea que "las subvenciones pueden crear externalidades internacionales negativas y distorsionar la asignación de recursos globales. Pero también pueden representar sensibles respuestas de política a un rango de fallas del mercado o jugar un útil rol al abordar la desigualdad del ingreso. La tarea de distinguir lo bueno de lo malo es extremadamente complicada como un asunto práctico. Las disciplinas a las subvenciones existentes hacen un trabajo deficiente en este frente y las soluciones no son aparentes. Dichas disciplinas también ignoran el otro lado del libro contable (tributación y regulación), de modo que el impacto neto del Gobierno sobre la competitividad es inadvertido y probablemente inobservable en la práctica".



del producto interno bruto global es la estimación del FMI para la subvención a la energía a nivel mundial. (FMI)

Evaluando el impacto transfronterizo de las subvenciones

El tema subyacente es cómo evaluar el impacto de las subvenciones fuera de la frontera del Gobierno que está subvencionando y sobre los bienes públicos globales. Las subvenciones pueden tener efectos positivos, tanto dentro como más allá de la frontera, y cualquier disciplina debe reconocer lo positivo y lo negativo. Si se comienza con la propuesta de que los Gobiernos deberían tener el espacio de política para proporcionar subvenciones siempre y cuando no causen impacto adverso fuera de su territorio o en el patrimonio común, entonces la pregunta es cómo determinar si hay impacto y en qué medida.

Opciones de política

Al recomendar reformas y mejoras en las disciplinas a las subvenciones, se considera adecuado un enfoque de tres niveles tal como aquel que se encuentra en el Acuerdo SMC. En primer lugar, es necesario establecer una categoría de subvenciones no recurribles muy definidas. Esto incluiría subvenciones que de manera útil abordan fallas de mercado u otras externalidades.

En segundo lugar, habría que ampliar la categoría de subvenciones que podrían estar sujetas a prohibición absoluta o a presunción de prohibición. Esto incluiría subvenciones que generan externalidades negativas que deberían ser eliminadas o prohibidas.

En tercer lugar, todas las otras medidas deben caer dentro de la categoría que el Acuerdo SMC llama recurribles, siempre y cuando se demuestre un impacto negativo fuera del país o hacia bienes comunes. Estas estarían sujetas a disciplinas similares al Acuerdo SMC existente con algunos ajustes para que las disciplinas multilaterales sean más efectivas y las disciplinas unilaterales menos propensas a inclinaciones proteccionistas.

Una preocupación clave en la categorización anterior es aquella que establece definiciones claras y criterio estricto para su inclusión, así como procedimientos efectivos para monitorear y resolver diferencias. Además, es necesario desarrollar una recopilación sistemática y mejores datos sobre las subvenciones.

Establecer una categoría de subvenciones no recurribles

Cada vez hay más evidencia y mayor consenso sobre la necesidad de apoyar los esfuerzos pertinentes para la adaptación y mitigación del cambio climático y otras preocupaciones ambientales. Sin embargo, no todas las medidas podrían ser utilizadas debido a que un país podría ganar ventaja comercial sobre otro dependiendo de lo que se subvencione. Una combinación de instrumentos legales vinculantes y no vinculantes podría manejar estos temas.

En cuanto a las subvenciones de desarrollo regional, muchos países, especialmente en desarrollo, experimentan altas disparidades en el costo de la inversión en distintas regiones y variaciones en las oportunidades de empleo a lo largo de estas regiones. En consecuencia, habría que considerar un espacio para subvenciones de desarrollo regional que compensen el costo adicional de invertir en una región en desventaja. Se necesitaría una base de referencia objetiva para medir estos costos. Otra posibilidad sería dar preferencia a los países más pobres.

De igual manera, es necesario dar espacio para subvenciones específicas en ciertas actividades de investigación y desarrollo (I&D) que no se desarrollarían sin el apoyo pertinente. Ya que el público estaría financiando dicha I&D, una opción segura sería que los resultados estén disponibles públicamente. Sería bueno que esta subcategoría de subvenciones no recurribles esté sujeta a una revisión periódica obligatoria.

En lo que concierne a los desastres naturales o provocados por el hombre, actualmente no hay medidas explícitas previstas bajo el Acuerdo SMC –el Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura establece pagos para el alivio de los desastres naturales. Cualquier área para subvenciones que permitan a una economía volver al estado previo al desastre necesitaría ser de tiempo limitado, con parámetros para determinar cuándo el período de

recuperación ha terminado. También necesitaría ser específico en la magnitud del desastre natural que podría calificar para dicho tratamiento.

Ampliar la categoría de subvenciones sujetas a prohibición

El Acuerdo SMC refleja el consenso de que existen ciertas formas de subvenciones cuyos resultados son tan dañinos que deberían estar prohibidos. Esto es evidente en la prohibición de las subvenciones a la exportación y de contenido local. Sin embargo, hay otras subvenciones que tienen el potencial para generar externalidades negativas que también deberían estar prohibidas.

Las subvenciones de localización para atraer inversión en bienes y servicios, por ejemplo, abundan en muchos países y los intentos para disciplinar esta práctica han fallado. Hay una sólida justificación para la cooperación internacional en esta materia. Sin embargo, la dificultad surge al definir la subvención de localización con suficiente especificidad para ser identificable, pero también con suficiente generalidad para capturar un rango de incentivos de inversión y subvenciones de desarrollo regional permitidas. Una posible definición podría ser subvenciones que dependan de una compañía específica que construya o amplíe instalaciones o una compañía específica que permanezca en instalaciones existentes por un período de tiempo.

En cuanto a las subvenciones a los combustibles fósiles, bajo las normas actuales estas subvenciones no pueden ser impugnadas sobre la base de las externalidades ambientales que generan. Un primer paso podría incluir una mejor notificación y evaluación por pares. Mientras tanto, debería perseguirse una eliminación inmediata gradual independiente de las subvenciones a la producción, lo que conduciría a una eventual prohibición de todas las subvenciones a los combustibles fósiles en tanto se toma en cuenta el impacto de las subvenciones al consumo sobre los pobres en el proceso de reforma.

En lo que respecta a otras subvenciones dañinas a los recursos naturales, lo que está en juego es lo que se conoce como la tragedia de los comunes, incluidas poblaciones de peces, bosques, agua y biodiversidad. La recomendación es combinar una prohibición de los tipos de subvenciones más notorias, mientras se deja a otras como recurribles. Estos enfoques de instrumentos jurídicos vinculantes deberían estar acompañados por disciplinas legales no vinculantes y deberían adoptarse acuerdos pertinentes por medio de vías plurilaterales, regionales y multilaterales.

Subvenciones recurribles

Las subvenciones que no estén en las clasificaciones de no recurribles o prohibidas son subvenciones que el consenso indica podrían ser permisibles, pero procesables. Si se demuestra que otros son dañados por su uso, recurrir a una medida correctiva debería ser posible. El tipo de proceso más probable de ser aceptado en este caso es similar a aquel actualmente establecido en el Acuerdo SMC.

Explorar el alcance para disciplinas en servicios

Deben establecerse disciplinas para las subvenciones a los servicios, sobre todo dado su rol cada vez más prominente en el comercio internacional. A la fecha, las negociaciones bajo el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios han no han alcanzado consenso sobre las disciplinas que deben fijarse y qué forma deben tomar.

Como con los bienes, hay argumentos a favor y en contra. Al explorar el alcance para disciplinar las subvenciones de servicios, la definición de subvención y medidas correctivas tendría que ser ajustada para tomar en cuenta la naturaleza variada del comercio de servicios y los diversos modos de suministro. El primer paso en este examen es la necesidad de mejores datos que permitan una identificación más informada de la naturaleza e incidencia sectorial de prácticas de subvención y su uso en distintos grupos de países.

Monitoreo, solución de diferencias y pasos siguientes. ¿Quién decide?

Los procedimientos para establecer, monitorear y resolver diferencias para los distintos tipos de subvenciones no necesariamente son idénticos, aun cuando habría semejanzas. El

Acuerdo SMC toma un enfoque mixto. El proceso de solución de diferencias establecido en la OMC refleja el fin de contar con un árbitro neutral que determina si los intereses de los miembros han sido dañados mediante el uso de subvenciones. El Acuerdo SMC también permite tomar a nivel nacional medidas compensatorias. La experiencia sugiere que cuando se toma el enfoque unilateral hay una tendencia inherente hacia el favorecimiento de los intereses proteccionistas locales. Adicionalmente, únicamente economías de grandes mercados pueden utilizar medidas compensatorias de manera efectiva para muchos productos. Las siguientes opciones deben ser, por tanto, consideradas.

Fortalecer la toma de decisiones neutrales

El rol de un tomador de decisiones neutral en la solución de diferencias en subvenciones debe fortalecerse. La ventaja es que se puede aplicar una definición más amplia de subvención para decidir sobre temas límites y, por tanto, disciplinar de manera más efectiva. Una posibilidad sería establecer un grupo multinacional de expertos; otro sería utilizar procedimientos de arbitraje expeditos para complementar el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, con algunas controversias sujetas a arbitraje obligatorio.

Eliminar o restringir opciones unilaterales

La opción para tomar acciones unilaterales debe ser eliminada o al menos restringida. El Acuerdo SMC establece acciones de disciplina sobre subvenciones unilaterales y describe normas sobre cómo deben ser realizadas. El sistema actual debería ser ajustado para aplicar únicamente la definición más estrecha de subvención y sería adecuado redefinir cómo la noción de beneficio se determina. Las medidas compensatorias deben estar limitadas a compensar únicamente el efecto de las subvenciones por el exceso del apoyo recibido por competidores en el país importador. Adicionalmente, las decisiones nacionales deben estar sujetas a una solución de diferencias vinculante, iniciándose el caso cuando el daño comercial comienza y restaurando la situación anterior existente para el exportador si este gana.

Como parte de un nuevo examen de disciplinas de subvenciones internacionales deben realizarse preguntas sobre evidencia, beneficio, recursos, especificidad e impacto de las subvenciones transfronterizas.

En relación con las medidas comerciales correctivas, el sistema de la OMC no parece haber podido, a la fecha, asegurar el reembolso de las subvenciones. Más aún, la posibilidad de proporcionar compensación en vez de cumplir una decisión no favorable confiere una ventaja para países más ricos que tienen posibilidad de comprar su vía de escape respecto a decisiones que tienen consecuencias políticas domésticas negativas, una opción no disponible para países más pobres.

Adicionalmente, en un mundo de cadenas de valor en expansión, debería llevarse a cabo un análisis sobre el impacto de las subvenciones transfronterizas y considerar si debiesen estar disciplinadas y cómo. Deberá evaluarse si los reglamentos nacionales sobre medidas compensatorias y las normas de la OMC están adaptadas a las dinámicas de negocios contemporáneos de producción transnacional e inversión.

¿Cómo llegar ahí?

Podría parecer sorprendente el pensar cambios en disciplinas de subvenciones actuales dado el estancamiento general de las negociaciones de la OMC y la falta de interés con respecto a mayores reformas al Acuerdo SMC en la Ronda de Doha en curso. No obstante, el tema merece atención renovada y esfuerzo.

La interpretación del Acuerdo SMC por el Órgano de Apelación pareciera improbable que atraiga mayor cambio, ya que el Órgano de Apelación en el mejor de los casos está atrapado por el texto existente. ¿Hay enfoques fuera de la OMC que podrían funcionar? A primera vista, no pareciera haber ninguna otra organización que cubra la mayor parte de los países con probabilidad de abordar el tema, pero esto es engañoso debido a que es

probable que los cambios sean hechos en el curso de las negociaciones de alto nivel sobre cambio climático, por ejemplo.

Mientras se mejora el Acuerdo SMC en línea con las recomendaciones presentadas anteriormente, los procesos para reforma deben ser adoptados en foros multilaterales, regionales y plurilaterales fuera de la OMC a través de disciplinas legales no vinculantes para abordar preocupaciones específicas con respecto a las subvenciones. Esto puede incluir la acción decisiva sobre subvenciones a combustibles fósiles o una iniciativa sectorial sobre pesca sostenible.

Generar mejores datos

Una consideración clave en el debate recae sobre la obtención de mejores datos. El proceso de notificación intergubernamental formal no ha producido la amplitud o profundidad necesaria de información sobre las subvenciones para un conjunto consistente de datos que permitiría discusiones y decisiones informadas de política.

Mientras que el Acuerdo SMC abarca algunas subvenciones dentro de sus requerimientos de transparencia y notificación, la experiencia demuestra que la labor de reporte de la OMC subestima el alcance de las subvenciones. El trabajo producido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es posiblemente tan bueno como un esfuerzo multilateral. La notificación *reverse* (por competidores o grupos de interés públicos) puede alcanzar buenos resultados, pero no de manera sistemática. Por ello, podría ser necesario extenderse más allá de notificaciones de base gubernamental.

Una opción es establecer un consorcio internacional de universidades y grupos de expertos independientes que desarrollen una plataforma para la recopilación de datos utilizando estándares comunes, definiciones y metodologías de medidas. Estudiantes graduados e investigadores podrían estar inscritos en la iniciativa.

Conclusión

Alcanzar consenso en una agenda del tipo presentado en este documento podría firmemente posicionar el tema de disciplinas de subvenciones internacionales como un vector importante para la efectividad mejorada del sistema de comercio internacional para el desarrollo sostenible. Los formuladores de política interesados en anticipar una reforma son motivados a considerar estas opciones para su discusión e implementación tempranas. ❶

❶ Este artículo ha sido adaptado de un estudio más extenso que se puede encontrar en Horlick, G. & Clarke, P. (2016). *Rethinking subsidy disciplines for the future*. Ginebra, Suiza: ICTSD & WEF.



Gary Horlick

Abogado, bufete jurídico de Gary N. Horlick.



Peggy A. Clarke

Directora en el bufete jurídico de Peggy A. Clarke.

Sala de prensa

Visite nuestro sitio web para consultar más novedades: <http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes>

Inicia la 22ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC

La conferencia anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) comenzó el pasado 7 de noviembre en Marrakech, Marruecos, con delegados de cerca de 200 naciones que trabajarán, principalmente, en el progreso de la implementación del Acuerdo de París (AP), el cual entró en vigor el viernes 4 de noviembre de 2016.

A la fecha, 103 firmantes han ratificado el AP, representando el 73% de las emisiones globales. Bajo su estructura, los países han delineado planes de acción climática que serán implementados a partir de 2020 y ampliados con el tiempo. El AP también tiene acuerdos generales que abordan aspectos de contabilidad, finanzas y balance. Sin embargo, deberán abordarse detalles clave.

Al entrar el AP en vigor, funcionarios y analistas afirman que una implementación exitosa es crucial, aunque advierten que los actuales compromisos son insuficientes para prevenir las consecuencias del calentamiento global.

OACI acuerda reducir emisiones de la aviación

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), representantes gubernamentales y miembros de la sociedad civil alcanzaron el 6 de octubre un acuerdo internacional para reducir las emisiones de dióxido de carbono de la aviación internacional.

El "Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional" (CORSIA, por sus siglas en inglés) es un mecanismo basado en el mercado que abordará cualquier incremento en las emisiones sobre la base de los niveles del 2020 y obligará a las compañías a hacer compensaciones cuando lo excedan.

De acuerdo al documento, y tras dos semanas de negociaciones en Montreal, los países pueden elegir formar parte en una fase piloto que comenzará el 2021. Después, estos podrán optar por ingresar a una primera fase voluntaria que comenzará en el 2024. La segunda fase será obligatoria para todos los Estados partes y aplicará desde el 2027 al 2035.

Se aprueba enmienda al Acuerdo de Montreal

Representantes de casi 200 países adoptaron un acuerdo sobre la eliminación progresiva de la emisión de los hidrofluorocarbonos (HFC) luego de una intensa semana de negociaciones durante la 28ª Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal en Kigali, Ruanda.

El documento alcanzado entre el 10 y el 14 de octubre, reafirma el potencial de la cooperación multilateral sobre temas climáticos críticos, donde se reconoce el comercio como una herramienta para la implementación.

El acuerdo enmienda el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que afectan la capa de ozono y prevé reducciones en el uso de los HFC a partir del 2019 para los países más ricos y una reducción general para todas las naciones a partir del 2040. De acuerdo a estimaciones, esto podría evitar 0,5 °C de calentamiento global por sobre los niveles preindustriales para fines de siglo. Sin embargo, algunos expertos han advertido que estos números no han sido oficialmente confirmados.

Brasil reporta reducción en subvenciones agrícolas

Brasil ha reportado una reducción considerable de sus subvenciones al sector agrícola en 2014-2015 de acuerdo a las cifras presentadas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) a fines de octubre.

La baja reportada se debe principalmente a categorías clasificadas en el compartimiento verde de la OMC, lo que implica subvenciones que no distorsionan el comercio. De acuerdo al organismo multilateral, dichas subvenciones tratan sobre "programas que no van destinados a productos concretos, e incluyen las ayudas directas a los ingresos de los agricultores que están desvinculadas de los niveles de producción o precios actuales".

La OMC ha señalado que Brasil y Rusia cumplen 100% con sus notificaciones de ayuda interna, mientras que Australia, Canadá y Estados Unidos lo hacen en un 95%. Las cifras de la Secretaría muestran también que varios países en desarrollo cumplen plenamente sus obligaciones en materia de informes.

Publicaciones sugeridas

Puentes recomienda en esta sección algunas nuevas publicaciones de ICTSD y otras instituciones que están contribuyendo al estudio y una mejor comprensión del comercio internacional, con implicaciones también para América Latina.



Servicios y desarrollo sostenible: un acercamiento conceptual **Services and sustainable development: a conceptual approach**

En la mayoría de los países, sin importar su estado de desarrollo, los servicios contribuyen de manera crítica al producto interno bruto y son una importante fuente de empleos. La naturaleza de la relación entre los servicios y la consecución del crecimiento económico y sostenible es compleja y multifacética.

Este texto desarrollado por ICTSD pretende dar cuenta de esa relación al tiempo que ofrece a los encargados de formular las políticas una guía práctica de los servicios que se deberían priorizar dado que potencian el desarrollo económico. <http://bit.ly/2cLUb6s>



Crecimiento sostenible e inclusivo: la conexión entre los ODS y las CGV **Inclusive and sustainable growth: the SDG value chains nexus**

La clave para el desarrollo económico en una era de profunda globalización radica en cómo se posicionan los productores dentro de las cadenas globales de valor (CGV), las cuales representan más de dos tercios del comercio global.

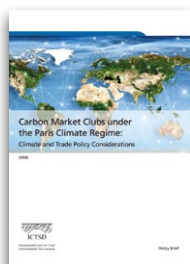
El trabajo realizado por ICTSD en este texto se propone no solo esclarecer la naturaleza y significado de las CGV en la economía global y cómo posicionarse correctamente en de ella, sino que también ofrece un ambicioso análisis del impacto de las CGV en los distintos ODS, a fin de facilitar tanto a académicos como a los encargados de formular políticas un marco para el análisis profundo de los impactos de las CGV de manera sectorial y geográfica. <http://bit.ly/2cye2Gy>



Cambio climático y energía limpia en la Agenda 2030 **Climate change and clean energy in the 2030 agenda**

Las políticas comerciales y normas de comercio pueden realizar contribuciones clave para lograr los objetivos de la Agenda 2030, a través del control del cambio climático y el mejoramiento al acceso de las energías limpias. Este trabajo de ICTSD analiza seis políticas fundamentales en la intersección entre política comercial y dichas áreas.

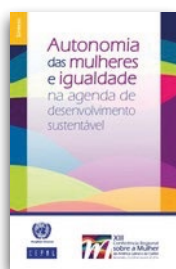
Los autores recomiendan tomar acciones políticas en tres áreas: subvenciones a los combustibles fósiles; subvenciones a las energías limpias; y acceso, difusión y transferencia de tecnologías amigables con el medioambiente. Al mismo tiempo, sugieren tomar acciones políticas para enfrentar otros tres temas importantes: lidiar con los requisitos de contenido local, la fijación de precio del carbono; y el diseño de incentivos y sanciones para promover acciones ambiciosas en los clubs climáticos. <http://bit.ly/2fmluls>



Los clubs en el mercado de carbono bajo el régimen climático de París **Carbon market clubs under the Paris climate regime**

Dada las particularidades del Acuerdo de París, especialmente debido a la determinación de las contribuciones nacionales, han de ser necesarios esfuerzos adicionales para conseguir que se logre el objetivo con respecto a mantener la temperatura por debajo de los 2 °C.

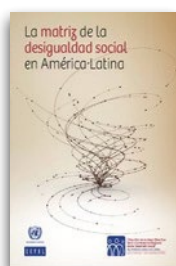
Reconociendo la importancia de los mercados de carbono para la mitigación del cambio climático, este texto de ICTSD se enfoca en el potencial y las oportunidades que presenta la formación de clubs en el mercado de carbono, al tiempo que considera el espacio en el cual se desarrollarán a través de una perspectiva de la política comercial, así como el alcance que podrían tener para hacer uso de medidas comerciales. <http://bit.ly/2eFmRNA>



Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible

Es imperativo reconocer que la igualdad y el ejercicio de los derechos humanos son principios fundamentales de la democracia y el desarrollo sostenible y el grado de ejercicio de los derechos y la autonomía de la mujer son clave para su consolidación. La democracia tiene una deuda histórica con las latinoamericanas y caribeñas, pues aún hoy se sigue demandando mayor representación política, acceso a los recursos, ingresos e igualdad laboral.

En el documento de Cepal se propone un análisis en profundidad de las diferentes áreas donde la inequidad de género se expresa en América Latina y el Caribe y propone políticas de igualdad de género innovadoras y efectivas que buscan promover sinergia entre los compromisos de la Agenda 2030 y la agenda regional de género. <http://bit.ly/2f6ZNbd>



La matriz de la desigualdad social en América Latina

La desigualdad social es uno de los problemas centrales de la región latinoamericana y aun con los esfuerzos realizados persisten altos niveles de desigualdad que atentan contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza; dos objetivos clave dentro de la Agenda 2030.

El documento de la Cepal da cuenta de las brechas estructurales que marcan la desigualdad en las sociedades latinoamericanas y que resultan fundamentales para avanzar en la senda del desarrollo sostenible y cumplir los objetivos definidos en la Agenda 2030. <http://bit.ly/2ejVkjN>



La UE y ALC ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

El nuevo paradigma de desarrollo enmarcado bajo la Agenda 2030 y el Acuerdo de París han puesto la desigualdad y la crisis ambiental en el centro de la agenda internacional. Esto hace indispensable la cooperación multilateral para alcanzar los objetivos propuestos. En este contexto, es necesario renovar las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe para hacer frente a los nuevos retos que se presentan.

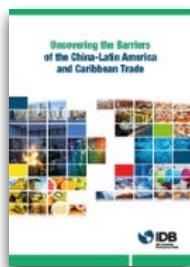
El documento presenta un panorama de los principales elementos que determinan la coyuntura económica, productiva, tecnológica, social y ambiental que enfrentan los países de ambas regiones y cuáles son los puntos de encuentro que permitirían desarrollar un nuevo panorama de integración. <http://bit.ly/2f0iqjc>



El ADN de la integración regional

Este documento del Banco Interamericano de Desarrollo toma el análisis de más de veinte mil encuestas realizadas en dieciocho países de América Latina y las compara con las estadísticas nacionales representando la opinión del pueblo latinoamericano de la manera más fidedigna posible.

La contraposición de opinión y estadísticas sirve como una herramienta eficaz para mejorar la planificación y evaluación del impacto de las políticas públicas. A tal fin se evalúan áreas como conectividad física, innovación y nuevas tecnologías, marca país y marca región y sostenibilidad ambiental y social. <http://bit.ly/2eFy9kZ>



Revelando las barreras del comercio entre China y América Latina y el Caribe

A lo largo de los últimos años, China y América Latina y el Caribe se han convertido en importantes socios comerciales, llegando a ser hoy en día el segundo socio comercial de la región. Sin embargo, en 2014 el crecimiento de la relación se desaceleró drásticamente y se tornó negativo.

Para que no pierda relevancia esta relación y continúe en aumento será necesario redoblar los esfuerzos tanto de los Gobiernos como del sector privado, lo que significa revisar y facilitar el acceso a ambos mercados, evaluar las barreras al comercio y sus impactos a ambos lados de la relación. <http://bit.ly/2fngXAm>

SIGA EXPLORANDO EL MUNDO DEL COMERCIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA RED BRIDGES DE ICTSD

PONTES

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible para el mundo de habla portuguesa- *Idioma português*
www.ictsd.org/news/pontes

BIORES

Análisis y noticias sobre comercio y ambiente para una audiencia global- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/biores

BRIDGES

Noticias relativas al comercio mundial desde una perspectiva de desarrollo sostenible- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/bridges

桥

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible para el mundo de habla china- *Idioma chino*
www.ictsd.org/news/qiao

МОСТЫ

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo con enfoque en los países del CEI- *Idioma ruso*
www.ictsd.org/news/bridgesrussian

BRIDGES AFRICA

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible con énfasis en África- *Idioma inglés*
www.ictsd.org/news/bridges-africa

PASSERELLES

Análisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible con énfasis en África- *Idioma francés*
www.ictsd.org/news/passerelles



Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible

Chemin de Balexert 7-9
1219 Geneva, Switzerland
+41-22-917-8492
www.ictsd.org

La producción de PUENTES es posible gracias al apoyo generoso de todos nuestros donantes, que incluyen:

DFID – Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido

SIDA – Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional

DGIS – Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dinamarca

Ministerio de Relaciones Exteriores, Finlandia

Ministerio de Relaciones Exteriores, Noruega

Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia

PUENTES también recibe contribuciones en especie de nuestro socio colaborador y de los miembros del Consejo Editorial.

PUENTES recibe publicidad pagada y patrocinios para apoyar el costo de la publicación e incrementar su impacto a nivel global y en Latinoamérica. La aceptación de las propuestas queda a discreción de los editores. Las opiniones expresadas en los artículos firmados de PUENTES son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de ICTSD.



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons de Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Precio: US\$ 10.00
ISSN 1563-0013

